

La democracia acechada. Protesta y política en Argentina, Brasil y Chile (2011-2019)

Democracy stalked. Protest and politics in Argentina, Brazil and Chile (2011-2019)

Resumen

En los últimos años, la región ha tenido una dinámica sociopolítica convulsionada en términos sociales y políticos, con fuertes oscilaciones entre gobiernos de izquierda y de extrema derecha. La movilización social ha actuado como una caja de resonancia de estos procesos. ¿Qué características asumió la movilización en los últimos años respecto de los actores y las discusiones públicas que se plantearon y cuáles han sido los efectos para la democracia? ¿Podemos seguir pensando que la movilización inexorablemente implica la consolidación de la democracia o también permite su erosión? El objetivo de este artículo es revisar la dinámica sociopolítica, específicamente la movilización social en tres países de la región: Argentina, Brasil y Chile, entre 2011 y 2019. El argumento que sostendremos es que en los tres países la movilización social estuvo asociada a la creciente desigualdad y descontento con la democracia, con particularidades locales, donde el proceso de discusión pública se desarrolló a partir de distintos núcleos de conflictividad. En todos los casos, aún con sus diferencias, la democracia terminó siendo cuestionada no sólo en clave de su funcionamiento, sino de sus posibilidades como comunidad política. En términos metodológicos utilizamos una estrategia principalmente cuantitativa a partir de una base de eventos de protesta social.

Palabras claves: Movilización Social, Democracia, Política

Abstract

In recent years, the region has had a turbulent socio-political dynamic in social and political terms, with strong oscillations between left-wing and extreme right-wing governments. Social mobilization has acted as an echo chamber for these processes. What characteristics has the mobilization assumed in recent years, with respect to the actors and the public discussions that arose and what have been the effects for democracy? Can we continue to think that mobilization inexorably implies the consolidation of democracy or also allows its erosion? The objective of this article is to revisit the socio-political dynamics, specifically social mobilization in three countries in the region: Argentina, Brazil and Chile, between 2011 and 2019. The argument that we will maintain is that in the three countries social mobilization was associated with the growing inequality and discontent with democracy, with local particularities, where the public discussion process developed from different nuclei of conflict. In all cases, even with their differences, democracy ended up being questioned not only in terms of its functioning, but also in terms of its possibilities as a political community. In methodological terms we use a mainly quantitative strategy based on a base of social protest events.

Keys Words: Social Mobilization, Democracy, Politics

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2024

Fecha de aceptación: 30 de junio de 2024

La democracia acechada. Protesta y política en Argentina, Brasil y Chile (2011-2019)

Ana Natalucci*
Lucio Fernández Mouján**
Alon Kelmesz***

Introducción

En los últimos años, la región ha tenido una dinámica sociopolítica convulsionada (Bringel, Martínez y Muggenthaler, 2021; Ferrero, Natalucci y Tatagiba, 2019; Abers, Almeida, y Bülow, 2023), con fuerzas políticas antagónicas que se han sucedido en el gobierno central. Entre principios del nuevo siglo y la mitad de la segunda década tuvo lugar el llamado giro a la izquierda, debido a la combinación de gobiernos progresistas, con políticas de ampliación de derechos y mejoramiento de las condiciones de vida material por el ciclo de las commodities (Levitsky y Roberts, 2011; De la Torre, 2013; Silva, 2017; Svampa, 2017; Rossi y Silva, 2018; Etchemendy, 2019; Ferrero, Natalucci y Tatagiba, 2019). Desde ese entonces, pero también como resultado de ese proceso, fue surgiendo un giro a la derecha que en algunos países se ha manifestado bajo la forma de fuerzas de extrema derecha que han llegado al gobierno (Stefanoni, 2020; Levitsky y Ziblatt, 2018; Zanotti y Roberts, 2021), un largo proceso de consolidación de desigualdades económicas (Assusa, y Kessler, 2020) y de deterioro significativo de las condiciones de vida y calidad de la democracia (Przeworski, 2022). Al mismo tiempo, la movilización social, históricamente organizada por fuerzas de izquierda o nacional-popular, ha sido protagonizada por sectores de derecha y extrema derecha, provocando una de las novedades más relevantes del panorama de la acción colectiva en el continente (Tatagiba, 2018; Dias, von Bülow, y Gobbi, 2021). En general, los estudios de la acción colectiva y los movimientos sociales han postulado que su orientación se dirigía al bien común; Melucci (1994) hablaba de luchas por la extensión de la ciudadanía, Touraine (1987) de su estatuto privilegiado para la transformación de la historicidad y Tilly (1998) del cambio social provocado por el conflicto político.

Ahora bien, las novedades en la movilización social nos llevan a hacernos algunas preguntas respecto de esas premisas fundantes del campo de estudio. ¿Qué características asumió la movilización en los últimos años, respecto de los actores y las discusiones públicas planteadas? ¿Cuáles han sido los efectos para la democracia? En definitiva, la cuestión de fondo -que esperamos que este artículo nos ayude a responder por lo menos parcialmente- es si la movilización conduce de modo inexorable a la consolidación de la democracia o también permite su erosión. El objetivo de este artículo es revisar la dinámica sociopolítica,

* Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín (EIDAES/UNSAM). Argentina. anatalucci@gmail.com.

** Becario Doctoral Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín (EIDAES/UNSAM). Argentina. luciomoujan@gmail.com.

*** Investigador en formación en el Observatorio de Protesta Social. Argentina. kelmeszesalon@gmail.com.

específicamente la movilización social en tres países de la región: Argentina, Brasil y Chile entre 2011 y 2019. Nuestro argumento es que en los tres países la movilización social estuvo asociada a la creciente desigualdad y descontento con la democracia, con particularidades locales, donde el proceso de discusión pública se desarrolló a partir de distintos núcleos de conflictividad. Mientras que en el caso argentino la discusión se centró en el conflicto distributivo y el acceso a derechos derivando en el cuestionamiento de las élites gobernantes, en Brasil lo hizo sobre temáticas asociadas a derechos sociales, con una tendencia de generalización hacia el régimen político, poniendo en cuestión la democracia como institución clave de la comunidad política y en Chile el descontento social se articuló en torno a los derechos sociales (sobre todo el educativo), para luego estallar en una impugnación al neoliberalismo como modelo de exclusión social.

Como puede observarse, el recorte temporal no responde a priori a un proceso particular o período gubernamental. Se inicia en las postrimerías de los efectos de la crisis global de 2008/2009 y continúa en la antesala de la pandemia de COVID-19. Como han demostrado varios estudios (Natalucci, et al, 2020; Gradin, Soto Pimentel y Reiri, 2022; Rebón y Troncoso, 2022, entre otros) aquella alteró de un modo significativo las formas de protestar, quebrando la serialidad y características vigentes hasta entonces. Por lo que analizar el período 2011- 2019 nos permite pensar en continuidades y cambios vinculados estrechamente al proceso político y de la movilización.

El estudio de los procesos de movilización tiene muchas aristas y entradas posibles. En este artículo, en relación con el objetivo y argumento, nos vamos a concentrar en una dimensión, que denominamos “núcleos de conflictividad”. Es decir, en todo evento de protesta, los actores que se manifiestan peticionan, reclaman o exigen algo, en otras ocasiones su presencia en la calle es sólo para exponer una opinión política (Fillieule y Tartakowsky, 2015). Esas demandas pueden ser sectoriales o pueden intentar generalizarse, en este proceso los agentes colectivos resignifican vocabularios y participan de controversias y problemas públicos para orientar el resultado de la contienda política. Asimismo, como han señalado autores diversos como Melucci (2001), Offerlé (2005) o Fillieule y Tartakowsky (2015), la acción colectiva implica siempre -más allá de los objetivos y demandas- la construcción de un espacio de socialización compartido, un sentimiento de pertenencia a un colectivo mayor. De esta manera, en ese proceso no sólo se “logran objetivos” sino que también se van construyendo las demandas, cursos de acción, estrategias. En tal dirección, proponemos reconstruir el debate que los grupos movilizados formularon en este contexto sociohistórico, de modo de poder enlazar los eventos y episodios de protestas con dinámicas sociopolíticas más amplias.

El artículo fue organizado de la siguiente manera. Una primera sección orientada a señalar los aspectos metodológicos del estudio de los problemas públicos, marcando a su vez la relación con las demandas y núcleos de conflictividad. La segunda sección analiza la dinámica general de la movilización, marcando sus principales características y tendencias. Luego, en la tercera, nos abocamos al análisis de los núcleos de conflictividad, identificando cuáles fueron los grandes temas a los que se dirigió el descontento social en cada uno de los países considerando elementos comparativos. Con el fin de realizar un análisis pormenorizado hemos tomado en cuenta tanto aspectos sincrónicos de los países como evolutivos. Finalmente, en la sección de

Reflexiones finales, retomamos el argumento y proponemos algunos ejes para pensar la coyuntura que han atravesado Argentina, Brasil y Chile en la última década.

Aspectos teóricos- metodológicos

Si bien las organizaciones pueden negociar sus demandas, es cierto que tienen una dimensión innegociable, asociada a sus identidades y bases de movilización (della Porta y Diani, 2015). El pasaje del planteo de demandas al de problemas públicos no es automático, supone en principio un proceso de autonomización de los actores que originalmente formularon un planteo y que permite que otros empiecen a intervenir y expresar sus opiniones. En ciertas oportunidades esto tiene lugar durante un ciclo de movilización, en el sentido que implica un proceso de incorporación de nuevas organizaciones, generalización de demandas e innovación de los repertorios de acción (Tarrow, 1997); como mencionamos anteriormente, los problemas públicos se elaboran durante ese ciclo. Haciendo una breve recapitulación, la sociología de los problemas públicos (Guerrero Bernal, et. al., 2018; Pereyra y Nardacchione, 2022) ha tenido una fuerte resonancia en el campo de la acción colectiva. Desde este enfoque, un problema público es definido como una “situación problemática que debe ser modificada por la acción humana” (Nardacchione y Pereyra, 2022: 71) y, en tal sentido, “abre la discusión sobre quién tiene la responsabilidad de hacerlo” (Pereyra, 2013: 281). La reconstrucción de un problema público implica “rastrear la actividad de quienes formulan, en un determinado momento, demandas específicas sobre un tema organizándolo y dándole forma” (Pereyra, 2013: 35). Entonces, si queremos entender por qué un tema se volvió problemático es necesario identificar a quién se reconoce como el responsable de esa situación, las diferentes posiciones sobre él y también el proceso de objetivación por el cual un problema público se constituyó como tal.

En general, este tipo de análisis se ha realizado desde una metodología cualitativa. En torno a este punto, teníamos el siguiente dilema: estudiar la dinámica de la movilización con una perspectiva diacrónica y comparada requería el uso de datos cuantitativos de eventos de protesta que nos permitieran construir un mapa en cada país y entre ellos y, al mismo tiempo, poder identificar las demandas y debates que habían tenido lugar. Como estrategia de resolución de este dilema, decidimos la construcción de una categoría de alcance intermedio -que denominamos “núcleos de conflictividad”- que nos permitiera ordenar las demandas presentes en las protestas en relación con sus orientaciones y pretensiones para dilucidar qué debates y temas los actores problematizaron, pero sobre los que luego perdieron el control discursivo a partir de la intervención de otros actores. Estos núcleos funcionan como un campo semántico o un campo nocional (Peira, 1977), en el que se integran neologismos, expresiones y vocablos que dicen algo sobre el mundo y los significados que portan para los sujetos. Estos núcleos remiten a un vocabulario compartido entre los manifestantes, aunque no por ello no disputado en tanto tienen un carácter metadiscursivo e interdiscursivo (Rennes, 2020).

En términos de la operacionalización de la noción de “núcleos de conflictividad”, decidimos la construcción de una tipología en función del agrupamiento de la variable “demanda”¹ en función de coincidencias semánticas. De esta manera, estos tipos están

1 La “demanda” es una variable destacada dentro de los estudios cuantitativos de protesta social (Schuster et al, 2006 y Natalucci et. al, 2023) y hace referencia a lo que se reclama, exige o peticiona en una acción colectiva. Estos reclamos se consolidan en categorías lo suficientemente exhaustivas para dar cuenta del contenido del

desvinculados de un mismo tipo de actor; es decir, están desingularizados (Rennes, 2020), desacoplados de sus experiencias originarias. A su vez, esta operación nos permitió reconstruir parcialmente el orden de la estabilización de los problemas públicos en cada uno de los países, considerando siempre su carácter precario y contingente, como también de su comparación temática. Cabe agregar que esta operación no se trató de una mera agregación, sino que consideramos sus orientaciones en términos de los debates que permitían entrever; es decir que el agrupamiento supuso un procedimiento hermenéutico.

En esta tipología elaboramos 4 núcleos de conflictividad, a saber. 1) “política institucional”: reúne las demandas de régimen político y de gobierno respecto del funcionamiento del sistema político y la democracia como al ejercicio del gobierno, autoridades y representantes; 2) “distributivo”: incluye las reivindicaciones de carácter económico, relativas a la puja capital-trabajo (laborales y salariales) y a la política económica y sectorial; 3) “derechos sociales”: relativo a derechos como educación, política urbana, género, salud, vivienda, ecología, auxilios sociales, seguridad social/ jubilación y tierra; 4) “violencia social e institucional”: demandas por justicia, derechos humanos y seguridad ciudadana, en un contexto de fuerte polarización política.²

Para la construcción de los datos cuantitativos y la elaboración de este artículo utilizamos la base de datos “LAProtesta. Base de Datos de Eventos de Protesta: Argentina, Brasil y Chile (2011-2020)”.³ La base fue construida de acuerdo con el modelo PEA, por sus siglas en inglés *Protest Event Analysis* (Análisis de Eventos de Protestas, en español), elaborado por Hutter (2014). Este método, también llamado “contar protestas”, propone convertir las palabras en números para procesar estadísticamente las acciones contenciosas llevadas adelante por agentes colectivos. Esta estandarización permite responder preguntas claves para entender la dinámica de la movilización social: ¿quiénes, por qué, a quién y cómo protestan los que protestan? A su vez, sobre estas preguntas se construyen las principales variables: organización, demanda, demandado y formato.⁴ La base fue construida a partir de tres fuentes periodísticas: La Nación

reclamo. En la base de datos que utilizamos para este artículo, las categorías de las demandas son las siguientes: régimen político, gobierno, salariales, laborales, política económica, política sectorial, educativas, de salud, de política urbana, género y derechos sexuales, vivienda, ecológicas/ambientales, de ayuda social, seguridad social o jubilación, tierra, de justicia y derechos humanos, seguridad ciudadana y otras (donde se incluyen las demandas presentes de manera poco frecuente con al menos el 1% de las protestas).

2 Además, hay una categoría residual, “otros”, donde quedaron incluidas las demandas que no constituyen un núcleo de conflictividad debido a su excesiva particularidad y poca relación con otras constelaciones.

3 La base fue construida en el proyecto “LAProtesta. Análisis de la contienda política en el Cono Sur de América” coordinado por Priscila Delgado de Carvalho, Ana Natalucci, Nicolás Somma y Luciana Tatagiba y desarrollado en el marco del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação [Instituto para la Democracia y Democratización de las Comunicaciones (INCT-IDDC), dirigido por Leonardo Avritzer y contó con la colaboración de los equipos nacionales que también aportaron sus recursos de investigación. El proyecto fue financiado por el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ, N° 465535/2014-3) y por la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG APQ 03612-17). En términos de su temporalidad, se concentró en el período extendido entre el 1° de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2019.

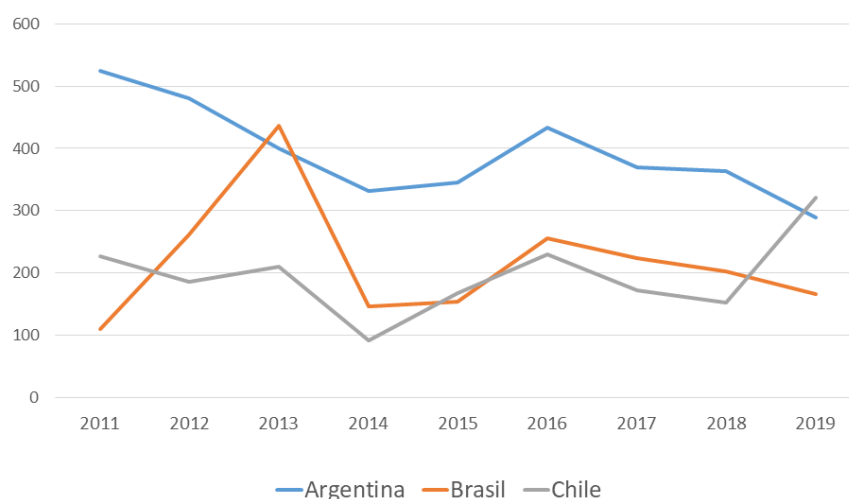
4 Las variables son múltiples ya que cada evento de protesta puede ser convocado por más de una organización, presentar más de una demanda, dirigirse a más de un demandado y realizarse en varios formatos. Esto significa que en muchos casos la suma de las categorías, por ejemplo de la variable “demanda”, es mayor a la cantidad de protestas. Por esto en todos los casos se especifica sobre qué variable se realiza la estimación y se agrega la cantidad

para Argentina, Folha de São Paulo para Brasil y La Tercera para Chile. Si bien todos los medios poseen sesgos ideológicos y de cobertura, se seleccionaron los medios de mayor alcance con archivo digital disponible para cada país. La carga de datos se realizó manualmente y se procesó mediante el programa estadístico SPSS.⁵

Una década movilizada: dinámica general y tendencias principales

Durante el período extendido entre 2011 y 2019 se produjeron importantes transformaciones en la dinámica de las protesta sociales, entre otras irrumpieron episodios de fuerte impacto en el sistema político, como las jornadas de junio de 2013 en Brasil, las protestas contra el proyecto de reforma previsional y laboral en diciembre de 2017 en Argentina, el estallido de octubre de 2019 en Chile, o la innovación de actores a partir de la emergencia de la extrema derecha (Jair Bolsonaro, Javier Milei, José Antonio Kast). Como puede observarse en el gráfico 1, Argentina es el país con mayor cantidad de protestas, con una tendencia estable, sin hitos o episodios marcados. Brasil tiene un pico marcado en 2013, sobre todo por los acontecimientos de junio, con un proceso de desmovilización luego del *impeachment* a Dilma Rousseff y Chile una tendencia baja -respecto a los otros países-, oscilante con un pico marcado en el estallido de octubre de 2019.

Gráfico 1: Eventos de protesta por año y país



Nota: El gráfico muestra la cantidad de protestas por año para cada país. Para todo el periodo la cantidad de protestas fue 3536 para Argentina, 1955 para Brasil y 1754 para Chile.

de casos por variable para una mejor comprensión de los resultados. Lo mismo sucede con los “núcleos de conflictividad”. En una misma protesta pueden presentarse más de un núcleo de conflictividad, por consiguiente es plausible que la distribución porcentual de dicha variable según la cantidad de protestas supere el cien por ciento.

⁵ Para profundizar sobre la base de datos, sus características, tipo de información y libro de códigos véase Carvalho, Natalucci y Somma (en prensa).

Fuente: elaboración propia en base a Carvalho, et al. (2024).

En Argentina, el período que analizamos (2011-2019) coincide con gobiernos bien diferenciados: el último año del primer gobierno y todo el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y el período completo de la presidencia de Mauricio Macri. Este cambio de gobierno significó la primera alternancia política luego de tres gobiernos del Frente para la Victoria, Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández por dos períodos (2007-2011 y 2011-2015), ciclo político que formó parte del llamado giro a la izquierda en América Latina, y un segundo momento, de giro a la derecha, a partir de la asunción de Macri como presidente por la coalición Cambiemos.

Una primera observación es que llamativamente no se identifican cambios abruptos en la dinámica de la protesta pese al significativo cambio político que trajo la victoria de la oposición en 2015; de hecho, la tendencia es decreciente entre 2011 y 2015, con un leve ascenso en 2016 y de nuevo descendente para 2019. Una segunda observación tiene relación con un ciclo corto de protestas acontecido entre 2012 y 2013 (Gold, 2019) luego de la reelección de Fernández de Kirchner por el 54% de los votos. Esto generó un malestar en sectores de la oposición que identificaban una suerte de kirchnerismo imbatible. Así surgieron consignas del tipo “somos el 46%” y una estrategia de movilización por parte de ciberactivistas antikirchneristas (Gold, 2019; Natalucci, 2022) que organizaron una serie de cacerolazos en las grandes ciudades del país. En total fueron 4 eventos, multitudinarios: 13 de septiembre (13S), 8 de noviembre (8N), 18 de abril (18A) y 13 de agosto (13A), que pusieron en el debate público cuestiones de índole políticas, entre ellas la corrupción y desempeño gubernamental y la oposición a cualquier proyecto de reforma constitucional que habilitara la re-reelección presidencial. A principios de 2013, el gobierno nacional impulsó el proyecto de ley llamado “democratización de la justicia” que implicaba una reforma del Poder Judicial Federal. Esto fue clave para la consolidación de un frente antikirchnerista que, en 2015, terminó confluyendo en la coalición Cambiemos (Vommaro, 2017). De modo sintético, esta coalición tenía un elemento constitutivo central compartido tanto por las élites partidarias como por sus bases sociales-electorales, se trata del temor a la chavización de la Argentina (Vommaro, 2017; Vommaro, Morresi y Bellotti, 2014); que, por otra parte, como veremos, era recurrente en otros países de la región.

La diferencia entre un ciclo y otro se vinculó con las relaciones entre movimientos, sindicatos y coaliciones progresistas. Los últimos años del kirchnerismo habían generado fuertes tensiones entre la coalición de gobierno y, sobre todo, las organizaciones sindicales, en parte por la puja distributiva -en el contexto de agotamiento de los *commodities*-, en parte por la distribución de los espacios de poder al interior del partido y gobierno. Durante 2012 -coincidentemente con los cacerolazos anti-kirchneristas-, se quebró la Confederación General del Trabajo (CGT) en un alineamiento antikirchnerista (CGT Azopardo) y otro kirchnerista (CGT Alsina), que se sumaba a la ruptura de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) en 2010 (Natalucci, 2015). Este acontecimiento tuvo un impacto rápido y significativo sobre la dinámica política, construyendo un escenario de movilización donde participaban kirchneristas, anti-kirchneristas y ex-kirchneristas. Por esta razón, la polarización visible en el campo político no fue mecánicamente trasladable al campo de la movilización (Natalucci, 2019).

El triunfo electoral de Mauricio Macri en 2015 cambió el mapa político local, con un importante giro conservador en materia económica y social. El gobierno implementó desde sus inicios “el programa del poder económico concentrado” (Cantamutto y López, 2019), que implicó un “shock distributivo” desde 2016 (Varesi, 2018), con una brutal transferencia de sectores populares a altos y otras consecuencias negativas en materia distributiva. Asimismo, la intención de reforma del Estado y el despido de miles de trabajadores de la administración pública central -política imitada por los gobiernos subnacionales- junto con el aumento de las tarifas de servicios públicos fueron claves para explicar ese pico de 2016, en general protagonizado por sindicatos de trabajadores estatales y de la educación. Si bien la crisis fue profundizándose en los años siguientes, la tendencia de la movilización siguió una trayectoria decreciente dado que fue consolidándose un proceso de articulación interorganizacional que, al mismo tiempo que agudizó la confrontación callejera, redujo la cantidad de eventos (ver Natalucci et. al, 2023).

En Brasil, el período de análisis comparte algunas similitudes con Argentina y también importantes diferencias. En primer lugar, el recorte temporal también forma parte del cierre del ciclo de gobiernos que tuvieron su giro a la izquierda en América Latina (Singer, 2012). El *Partido dos Trabalhadores* (Partido de los Trabajadores [PT]) llegó a la presidencia en enero de 2003 bajo la conducción de su principal líder, Luiz Inácio “Lula” da Silva. Luego de dos presidencias, su candidata a sucederlo, Dilma Rousseff, alcanzó la primera magistratura en enero de 2011. Sin embargo, a diferencia del caso argentino, la salida del gobierno no fue electoral, sino que luego de comenzado su segundo período de gobierno en 2015 comenzó un proceso de *impeachment*, concretado en agosto de 2016. Michel Temer, su vicepresidente, dirigente del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), ocupó la presidencia hasta el fin del mandato en 2018, cuando fue elegido Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL).

La dinámica de la protesta en Brasil fue bastante diferente a la de Argentina. De acuerdo con el gráfico 1 se observa un pico muy marcado en 2013, con una tendencia decreciente los años siguientes. Durante ese año se organizaron 445 eventos de protestas, con epicentro en junio, a partir de las demandas estudiantiles por el precio del transporte público, que se fueron extendiendo a cuestiones de índole urbana como el costo que aparejaron los megaeventos - Mundial de fútbol y Juegos Olímpicos (Tatagiba, 2019; Tatagiba y Galvão, 2019). Durante este ciclo, se produjeron varias novedades. Por un lado, con la aparición del escándalo de la operación “Lava Jato” que vinculaba a la empresa Petrobras con sectores políticos, la corrupción se construyó como un problema público, lo cual fue clave para el desprestigio de toda la clase política, incluyendo al PT (Kerche y Marona, 2022). Una de sus preocupaciones era la posible “chavización del Brasil” (Natalucci y Ferrero, 2021). Por otro lado, emergieron nuevos actores -por ejemplo, el antipetista- que junto con la innovación en los repertorios de acción (en especial por la reapropiación de los cacerolazos) se orientaron a cuestionar al gobierno federal. Uno de esos actores fue el *Movimento Brasil Livre* (Movimiento Brasil Libre [MBL]), autodefinido de derecha (Tatagiba y Galvão, 2019). Finalmente, como consecuencia, se produjo un amplio cuestionamiento a la representación política, que permitió -y terminó justificando- la intromisión del poder judicial sobre el campo político (Avritzer, 2019). Estas cuestiones fueron decisivas en el proceso abierto en torno a la destitución de Dilma Rousseff.

La elección presidencial de 2014 fue reñida: la diferencia de Rousseff respecto de Aécio Neves (*Partido da Social Democracia Brasileira*, Partido de la Social Democracia Brasileña [PSDB]) fue del 3,2%, quien no sólo rechazó este resultado, sino que convocó a protestas para denunciar el fraude electoral. Los sectores antipetistas se lanzaron a las calles utilizando remeras *verdeamarelas* para recuperar los colores nacionales y como estrategia para posicionarse como los patriotas en esta coyuntura. Estos enfrentamientos entre sectores petistas y antipetistas se profundizaron, generando un escenario de alta polarización política. El sector verdeamarelo logró tender acuerdos interpartidarios para avanzar en el *impeachment* a la presidenta Rousseff, concretado el 31 de agosto de 2016. Su sucesor, el hasta entonces vicepresidente Michel Temer, avanzó con un importante proceso de ajuste estatal y reforma laboral (Carvalho, 2018), que implicó la reactivación de la protesta sindical (Carvalho, Mate y Díaz, 2025), junto con la creciente polarización política y la persecución abierta a dirigentes opositores, entre ellos el principal líder de la oposición Lula Da Silva. Estas cuestiones implicaron un creciente deterioro en la confianza en la democracia, sus procedimientos e instituciones, que fueron clave para la consolidación de la fuerza de extrema derecha liderada en ese entonces por Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal- PSL). Bolsonaro ganó la elección general de octubre de 2018 contra el candidato del PT, Fernando Haddad. Su asunción en enero de 2019 profundizó el proceso iniciado por Temer años antes respecto de la polarización política, la crisis económica y el deterioro de la democracia (Tatagiba, 2018, Avritzer, 2019).

En Chile, dos figuras políticas se alternaron al frente del ejecutivo durante estos años: Sebastián Piñera (Partido Renovación Nacional) y Michelle Bachelet (Partido Socialista de Chile). El período que analizamos abarca parte de la primera presidencia de Piñera (2010-2014), la segunda presidencia de Bachelet (2014-2018) y los dos primeros años del segundo mandato de Piñera (2018-2022). Si bien esta alternancia era interpretada como un signo de la solidez del sistema político, lo cierto es que paralelamente se fue gestando “desde abajo” una acumulación de demandas insatisfechas por el modelo económico.

Si observamos el gráfico 1, la trayectoria de la protesta en Chile presenta un ciclo oscilante con un pico máximo durante 2019, a propósito del estallido social. En 2011, se organizaron 226 eventos, sobre todo por las movilizaciones masivas de estudiantes universitarios y secundarios, demandando educación gratuita y de calidad (Donoso, 2014). Para Ruiz Enzina (2013), este año marcó el retorno de la sociedad al espacio público, poniendo en jaque la política de consenso de la transición. La respuesta gubernamental fue una represión intensa, con un punto álgido el 4 de agosto, recordado como el “jueves negro”, que culminó con cacerolazos en repudio a la violencia ejercida por los carabineros en las calles de Santiago. El siguiente pico se produjo en 2013, a propósito del 40° aniversario del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, debido a la cantidad de protestas conmemorativas, en general protagonizadas por grupos conocidos como encapuchados, que recurrieron a tácticas disruptivas y violentas. Asimismo, ese año se fundó la Coordinadora “No Más AFP”, que reclamaba por la reforma del sistema de pensiones (Mejías y Panes, 2018).

En el segundo gobierno de Bachelet, se produjo una tendencia creciente de la protesta entre 2015 y 2016. La mandataria socialista había asumido la presidencia con el compromiso de implementar la gratuidad en el modelo universitario y con la expectativa de reformar la

constitución neoliberal impuesta por Pinochet. Bachelet promovió una reforma parcial del sistema educativo, sin embargo, la mantención de sus fundamentos estructurales combinada con denuncias de abuso sexual en numerosos colegios y acusaciones de maltrato a menores en instituciones estatales, como el SENAME, reavivaron las protestas del movimiento estudiantil. Asimismo, el gobierno llevó a cabo una reforma laboral que, si bien era progresiva en varios aspectos, introdujo nuevas restricciones, por ejemplo, al derecho a huelga. Por otro lado, en 2015, el escándalo de corrupción conocido como “caso Penta” expuso el sistema de financiamiento ilegal de partidos políticos, involucrando al hijo de la presidenta, que reorientó las protestas hacia demandas contra la élite política y contra la corrupción.

La protesta alcanzó su pico máximo en 2019 con el estallido social que transformó por completo el escenario nacional. Los detonantes fueron el alza del pasaje del transporte urbano de Santiago, sumado al pobre manejo comunicacional del gobierno (Avendaño, 2019; Selamé, 2022), en un contexto de deterioro económico y falta de respuesta a los movimientos sociales (Somma et. al., 2020), que no encontraron eco en todo el período a sus reclamos. Se desataron manifestaciones masivas y cortes de calle descentralizados en todo el país, con la destrucción parcial del Metro de Santiago el 18 de octubre como símbolo. Para Mayol (2019), la destrucción del metro implicaba que el emblema del modelo se derrumbaba en una sola noche. Entre las consignas más destacadas estaban “No son 30 pesos, son 30 años”, “Chile despertó” y “Renuncia Piñera”, “Hasta que la dignidad se haga costumbre”. Cuantitativamente la dimensión del estallido podemos verla reflejada en el siguiente número: en los últimos dos meses y medio de 2019 se relevaron en promedio 44 protestas por día. La respuesta inmediata de Piñera a la alta conflictividad fue declarar el estado de emergencia y la represión abierta, Según el informe de la CIDH (2022), entre el 18 de octubre 2019 y el 31 de marzo 2020, se registró un total de 8.630 de denuncias por agresiones y violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, debido a la continuidad de las protestas, Piñera se vio forzado a convocar un plebiscito para una eventual reforma de la Constitución. Así, el estallido condensó años de protestas contra el modelo neoliberal. Las protestas sólo empezaron a amainar con la promesa del plebiscito constitucional y redujeron su volumen casi al mínimo con la llegada de las restricciones a la circulación por la pandemia por COVID-19.

Respecto de la reforma constitucional, se votaron dos propuestas, ambas rechazadas por diversos motivos. La primera propuesta fue redactada por una convención constituyente elegida íntegramente en elecciones abiertas, con una orientación progresista y alineada con gran parte de las demandas del estallido social. La segunda propuesta fue redactada por un órgano con mayor representación partidaria donde tenía mayoría el partido republicano (sobre todo la agrupación de ultraderecha liderada por Jose Antonio Kast). Luego de dos votaciones consecutivas ganó el rechazo a la propuesta de reforma; por ello, el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, dió por concluido el proceso constitucional. A la fecha sigue vigente la carta magna impuesta por la dictadura militar.

Movilizaciones e interacciones con los gobiernos

Como puede observarse, en los 3 países se discutieron cuestiones diferentes, pero aun así la política y la democracia terminaron en el centro de los debates. Al respecto, es significativo que el gobierno central haya sido el primer demandado con grandes variaciones

respecto de su dinámica, a saber: primero se encuentra el caso chileno con el 58,5%, luego Argentina con el 35,3% y finalmente Brasil con el 28,8% sobre el total de las protestas. Vale recordar que, como mencionamos, para entender la elaboración de un problema público es clave entender a quien se responsabiliza de la situación que requiere de atención e intervención. En otras palabras, las demandas no sólo implican una reivindicación o reclamo, sino que en su formulación se da por supuesto quien debe ocuparse de ofrecer una respuesta, solución o alternativa.

Resumidamente, en Chile se distingue una concentración mayor de la disputa entre los manifestantes y el gobierno central, con el 58,5% de las protestas, donde el debate se concentró sobre el modelo neoliberal consagrado en la constitución. En tal dirección, la mayoría de las protestas le asignaron responsabilidad al presidente por ser en última instancia el sostén de un tipo de estructura institucional fundamentada en el neoliberalismo. Estos aspectos son claves para entender porque uno de los reclamos principales que emergieron durante el estallido de fines de 2019 haya sido la reforma constitucional, es decir, la revisión y establecimiento de otro tipo de pacto acerca de cómo regular las relaciones sociales, económicas y políticas. El resto de los sectores demandados es bastante más bajo, por ejemplo, empresarios (11,7%), gobierno local (5,1%), instituciones educativas (4,2%) y poder judicial (3,7%). Chile es el único país de los tres donde el poder Legislativo no está referenciado como interlocutor de los sectores movilizadores.

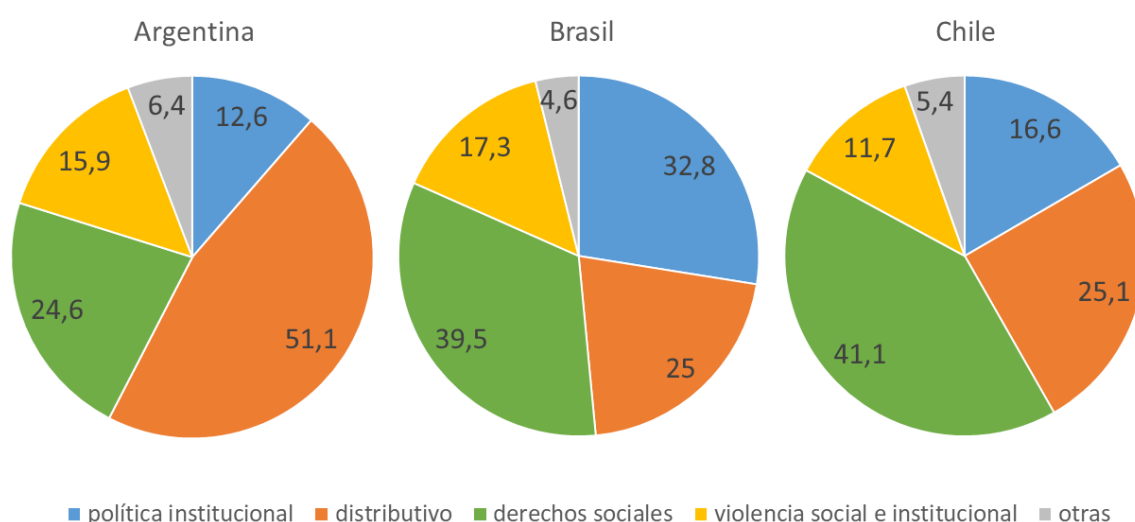
En Argentina, la dinámica es más bien bifronte, repartida entre el gobierno nacional y los provinciales, a los que se les dirigió el 31,6% de las protestas. Esto puede atribuirse al tipo de movilización preponderante, que en general está promovida por las organizaciones sindicales. Las protestas sectoriales, por ejemplo del sector público, (administración pública, docentes, de la salud, etc.) suelen tener como interlocutores a los gobernadores. El gobierno nacional como demandado aparece a partir de los procesos de generalización de las protestas. El tercer demandado han sido los empresarios, representando el 14,9% del total, debido a lo exacerbado del conflicto sindical del ámbito privado, con una lógica de tipo corporativa, sin traspasar los límites de la puja capital-trabajo. Bastante más atrás se encuentran el poder judicial (6,8%) y el legislativo (6,4%), demandados por cuestiones vinculadas a la administración de la justicia y la reforma judicial feminista para la adopción de una perspectiva de género en los procesos y la exigencia de tratamiento de leyes como la de emergencia social y despenalización del aborto.

En Brasil, se observa un menor cuestionamiento al poder central, sólo un tercio se dirigieron a él (28,8%). La particularidad de este caso es que la protesta se dirigió a una gran diversidad de actores: el poder legislativo (15,9%), los gobiernos regionales (14,3%), locales (13,2%) y el poder judicial (12,4%). Esta diversidad -pero además casi simétrica en los porcentajes de estos últimos- puede explicarse por varios motivos y con diferencias en las temporalidades. Por un lado, durante el gobierno de Rousseff las demandas se dirigieron al gobierno central, sobre todo por la denuncia de la corrupción y las vinculadas al hábitat, transporte y utilización de fondos públicos por la realización de los mega eventos. Por otro lado, el inicio del *impeachment* conllevó la incorporación de otros actores a la disputa política y, con ella, su identificación como demandados. Así en primer lugar, se incluyó al poder legislativo en su reclamo a la destitución de la presidenta y luego al poder judicial con el proceso ya

concretado y la abierta persecución a líderes petistas y de movimientos sociales en general, como fue el caso de Marielle Franco.

Núcleos de conflictividad: debates y actores

Gráfico 2: distribución de los núcleos de conflictividad por país (2011-2019). En porcentajes sobre el total de protestas.



Nota: el porcentaje se expresa sobre el total de protestas en cada país. En Argentina son 3536, en Brasil 1955 y en Chile 1754. Debido al carácter múltiple de esta variable los porcentajes pueden superar el 100%. La categoría “otros” constituye una de tipo residual, por lo que no será tenida en cuenta para el análisis.

Fuente: elaboración propia en base a Carvalho, et al. (2024).

Como mencionamos anteriormente, para analizar los principales debates que tuvieron lugar en los tres países, construimos la categoría de núcleos de conflictividad, de modo de poder trabajar con un mayor nivel de articulación de las demandas de las organizaciones movilizadas.

En Argentina, el principal dato es que hay un núcleo de conflictividad que se destaca en demasía por sobre el resto, se trata del distributivo, que alude a reclamos salariales, laborales, de política económica o sectorial. Este estuvo presente en el 51,1% de las protestas, visibilizando la relevancia de la disputa entre capital y trabajo y también por el rumbo económico de los sucesivos gobiernos. El poderío y la tradición de lucha del sindicalismo, sumado a las limitaciones del modelo económico, específicamente la restricción externa (Gaggero, et al., 2014) y la creciente inflación (Kulfas, 2016), sostuvieron la preponderancia de este núcleo a lo largo del período. El freno al proceso distributivo durante el gobierno peronista y el impulso regresivo a lo largo del gobierno de Macri se vieron reflejados en un creciente descontento social en torno a la desigualdad y al manejo de la economía que se fue orientado hacia las élites gobernantes, un factor central para comprender el ascenso al poder de un *outsider* de extrema derecha en diciembre de 2023, como Javier Milei.

El segundo núcleo alude a los derechos sociales, presente en un 24,6% de las protestas. En la gran mayoría de los casos pueden atribuirse a la ineficiencia en la prestación y acceso a

ciertos derechos que debían ofrecer los servicios públicos como la luz, el transporte y la educación; en otros casos remite a cuestiones vinculadas a la ampliación de derechos como el aborto o laborales para trabajadores informales y precarios. El núcleo referido a la violencia social (15,9%) presenta tanto reclamos de organismos de derechos humanos o familiares de víctimas de delitos o de violencia institucional como reclamos por mayor seguridad. En esta etapa el dato más saliente es que el incremento de la movilización contra los femicidios promovida por el colectivo #NiUnaMenos en los primeros meses de 2015. Finalmente se destaca por el bajo peso en todo el periodo el núcleo referido a la política institucional (12,6% de las protestas). Si bien los reclamos contra el gobierno fueron un activador de los cacerolazos contra Cristina Fernández en 2012 o contra la violencia institucional del gobierno de Mauricio Macri en 2016, su peso relativo es bajo. Estos datos permiten inferir que el descontento social no estuvo orientado contra el funcionamiento del sistema institucional, sino más bien con las políticas en materia de intervención estatal y económica. Así la idea amplia de democracia, como garante no sólo de las libertades individuales, sino de los derechos sociales, entró en colisión con la realidad material caracterizada por la consolidación de las desigualdades.

En Brasil, el análisis de los núcleos de conflictividad presenta la siguiente dificultad: el *impeachment* a Dilma Rousseff parte en dos el período. Como veremos en el apartado siguiente sobre la trayectoria de los núcleos, se observa un drástico cambio en respecto a las agendas de la conflictividad social. Así que, partiendo de esta observación, en todo el período se destacan dos núcleos de conflicto: el de derechos sociales y el de política institucional. El primer núcleo estuvo presente en el 39,5% de las protestas, con fuerte predominancia durante el gobierno de Rousseff, en referencia tanto a la oposición a determinadas medidas como al aumento del transporte público, las obras por los mega eventos, como al reclamo por la falta de derechos como la tierra y la vivienda. Luego del *impeachment* los reclamos de este núcleo se dirigieron hacia a los recortes en el presupuesto educativo y contra la reforma previsional que impulsó Temer en 2017. El núcleo de política institucional estuvo presente en el 32,8% de las protestas y da cuenta de la crisis política desatada a partir del *impeachment*. El proceso destituyente, la lucha contra la legitimidad del gobierno de Michel Temer, la persecución a dirigentes opositores y la irrupción del dirigente ultraderechista Jair Bolsonaro son distintas aristas de una crisis generalizada del sistema democrático y del deterioro de las posibilidades de la comunidad política.

El núcleo distributivo estuvo presente en el 25% de las protestas con reclamos principalmente de índole laboral y salarial durante el gobierno del PT; mientras que, con el gobierno de Temer, este tipo de reclamos mermó en favor de las protestas contra las medidas económicas de ajuste y la reforma laboral. Esto implicó a su vez un cambio en los protagonistas de los actores que se movilizaban. En general, los movimientos sociales y organizaciones sindicales -principalmente la Central Única dos Trabalhadores (Central Única de Trabajadores [CUT])- se movilizaban en pos de la ampliación de derechos sociales y distributivos; los sectores verdeamarelos lo hacían principalmente por cuestiones vinculadas a la corrupción y, luego, para forzar el recambio gubernamental. Por último, el núcleo de violencia social e institucional estuvo presente en el 17,3% de las protestas, apenas por encima de los demás países. Como se verá en el apartado siguiente, la persecución política a dirigentes opositores impulsó este tipo de reclamos durante el gobierno de Temer.

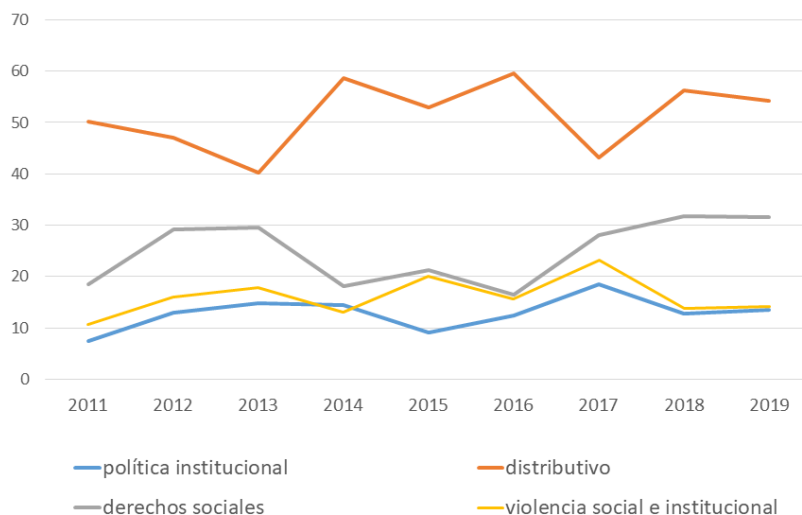
En Chile la mirada en los núcleos de conflictividad permite identificar qué se estaba discutiendo en los años previos al estallido social, entender cuáles fueron los emergentes y quiénes fueron los activadores. El núcleo relativo a derechos sociales es el primero en importancia (41,1% de las protestas), sobre todo debido al conflicto educativo y al movimiento estudiantil, a partir de la demanda por la gratuidad de la enseñanza. Parte de la explicación de por qué este núcleo fue preponderante está relacionado a que, si bien el país podía exhibir buenos números macroeconómicos, la contracara era una magra oportunidad de ascenso social, con la consecuente desigualdad (Ruiz y Boccardo, 2014). Otros reclamos sociales relevantes fueron la lucha por pensiones dignas, la crítica al sistema de salud y la lucha por el acceso a la vivienda. En segundo lugar, aparece el núcleo distributivo, presente en el 25,1% de las protestas. Si bien también hubo reclamos de índole salarial, la gran mayoría de las protestas fueron para luchar por una reforma laboral progresista.

Una de las consignas del estallido social “no son 30 pesos, son 30 años” iba directamente en este sentido. Tanto el reclamo educativo como el laboral eran reivindicaciones particulares, pero también formas de poner en cuestión el condicionamiento neoliberal que subyacía a la constitución pinochetista y la insatisfacción por las respuestas parciales brindadas por los sucesivos gobiernos. Esto fue provocando una deslegitimación total de las instituciones, como los partidos políticos y otros poderes estatales, poder judicial y legislativo; extendido luego a los medios de comunicación masiva y las fuerzas policiales. Sin embargo, este proceso no fue acompañado de un fuerte reclamo de política institucional, sólo presente en el 16,6% de las protestas, ni tampoco estuvo en el centro de los reclamos la fuerte política represiva (perteneciente al núcleo de violencia social, el más bajo de los tres países, con el 11,7%). Esto permite entender que si bien había una crítica fuerte al gobierno de Piñera la demanda era un cambio más radical, una solución de fondo a las desigualdades constitutivas en Chile.

Los tiempos del debate: la trayectoria de los núcleos de conflictividad

Ahora bien, ¿cómo se fueron construyendo esos debates que se elaboraron en la clave de problemas públicos? ¿Qué acontecimientos y actores fueron claves de dicho proceso? Al respecto, en esta sección nos vamos a detener en la trayectoria de los núcleos de conflictividad, en cuáles tuvieron mayor peso en determinadas coyunturas y cuál fue su impacto respecto de los cambios gubernamentales y los ciclos socioeconómicos. De alguna manera, se trata de poner en perspectiva los procesos de movilización en la clave de las dinámicas sociopolíticas.

Gráfico 3: Evolución de los núcleos de conflictividad en Argentina. En porcentajes sobre el total de protestas de cada año.



Nota: el porcentaje se expresa sobre el total de protestas de cada año. En 2011 fueron 524 protestas, en 2012: 481, en 2013: 400, en 2014: 331, en 2015: 345, en 2016: 433, en 2017: 370, en 2018: 363 y en 2019: 289. Al ser la demanda una variable múltiple, los porcentajes pueden superar el 100%. La categoría “otros” constituye una de tipo residual, por lo que no será tenida en cuenta para el análisis.

Fuente: elaboración propia en base a Carvalho, et al. (2024).

En el caso argentino, tal como se viene señalando, se identifica una dinámica general de relativa estabilidad en todo el período, sin grandes fluctuaciones. El conflicto distributivo, y en especial el debate sobre la orientación económica, ha ocupado el lugar central, independientemente del signo político del gobierno. Esto es importante para entender el descreimiento y deterioro de la democracia como sistema social. Sin embargo, si nos detenemos sobre su trayectoria podemos identificar en qué momento adquirió tal relevancia. Desde los inicios del segundo mandato de Fernández de Kirchner hasta las elecciones de medio término en 2013, el conflicto distributivo compartió la agenda pública con problemáticas relativas a derechos sociales, sobre todo por el cuestionamiento sobre el funcionamiento de servicios públicos como el transporte y la electricidad y reclamos sobre inseguridad y la movilización de los sectores antikirchneristas que impugnaban el rumbo del gobierno político y económico. Un elemento destacado es que durante este período se realizan las primeras protestas masivas convocadas por redes sociales, sin una institucionalidad organizativa consolidada.

En la transición gubernamental entre el último mandato kirchnerista y el gobierno de Macri, extendido entre 2014-2016, se produjo el mayor debate en torno al eje económico. No es casual que, ante la inminencia de una elección presidencial, con posibilidades reales de recambio de dirección (debido la consolidación de una coalición anti-kirchnerista, como la Coalición Cambiemos), se diera esta disputa por la hegemonía sobre el modelo de acumulación del capital. Durante los últimos años kirchneristas, un sector del sindicalismo decidió enfrentar al gobierno realizando cinco paros generales y a la vez los sectores empresarios incrementaron sus reclamos de cambio en el rumbo económico, sobre todo por la cuestión monetaria y de

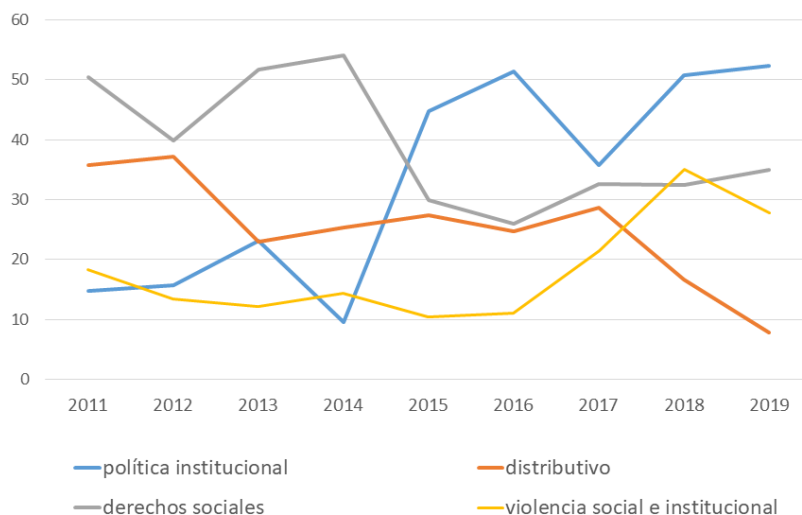
permisos para la importación. El gobierno de Cambiemos, recién asumido, tomó medidas demandadas por estos sectores (devaluación, despidos, apertura del cepo cambiario e incrementos desmedidos en los servicios públicos), por lo que 2016 fue un año de muchísima conflictividad encabezada por el sindicalismo y los movimientos sociales. La ofensiva de los sectores dominantes para recuperar su posición de privilegios fue clave para la rearticulación de las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, que como mencionamos en una sección anterior, habían sufrido varias rupturas en los últimos años del kirchnerismo.

En 2017, el debate público incorporó nuevos temas debido a la crisis provocada por el propio gobierno. Por un lado, cobraron mayor relevancia demandas educativas y de asistencia social directa (integrada al núcleo de derechos sociales) debido al significativo empeoramiento de las condiciones de vida. Asimismo, en la segunda mitad del año, ocurrió un hecho escalofriante: en agosto se produjo la desaparición de Santiago Maldonado en un contexto de represión de una protesta en la provincia de Chubut. Si bien el gobierno había adoptado desde su asunción la respuesta represiva frente a la protesta social -por ejemplo, intentó implementar un protocolo anti-piquete para impedir el corte de calles- lo cierto que reprimir y desaparecer el cuerpo de un manifestante era inédito en la historia reciente y en franca colisión con la tradición de derechos humanos construida en la transición democrática. Este acontecimiento fue clave para la activación de un ciclo de protestas que articularon reclamos relativos al núcleo de violencia social y de política institucional. Entonces durante el segundo semestre de 2017 se discutió esto, más el proyecto de reforma laboral y previsional que el gobierno había enviado al Congreso luego de haber ganado las elecciones legislativas. La reforma laboral no pudo ser aprobada por la alta resistencia sindical, que fue clave además para la protesta de los años siguientes.

Desde principios de 2018, la crisis económica se profundizó a partir de la corrida cambiaria a principios de año, por lo que el conflicto económico volvió a ocupar el centro del debate hasta el final del gobierno. El nuevo acuerdo que el gobierno entabló con el Fondo Monetario Internacional fue clave para la activación de la protesta y la identificación del gobierno nacional como el responsable de la crítica coyuntura. El acontecimiento que de alguna manera no respondía a la dinámica sociopolítica, sino centralmente a los derechos sociales, fue la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo dada a lo largo de 2018. Si bien por la oposición del gobierno no fue posible la sanción de la ley, se asentaron las bases para su aprobación en 2020.

Estos procesos fueron claves para que la movilización tuviera un descenso marcado en 2019 y el debate público más bien se orientó hacia el rumbo político y económico del gobierno frente a la inminencia de las elecciones presidenciales. Los sectores movilizados, sobre todo peronistas, tenían como consigna “Hay 2019” como clara expresión de utilizar las elecciones para torcer el rumbo, recuperando el perdido en 2015.

Gráfico 4: Evolución de los núcleos de conflictividad en Brasil. En porcentajes sobre el total de protestas de cada año.



Nota: el porcentaje se expresa sobre el total de protestas de cada año. En 2011 fueron 109 protestas, en 2012: 261, en 2013: 437, en 2014: 146, en 2015: 154, en 2016: 255, en 2017: 224, en 2018: 203 y en 2019: 166. Al ser la demanda una variable múltiple, los porcentajes pueden superar el 100%. La categoría “otros” constituye una de tipo residual, por lo que no será tomada en cuenta para el análisis.
 Fuente: elaboración propia en base a Carvalho, et al. (2024).

En el caso de Brasil, como mencionamos con anterioridad, la trayectoria de los núcleos de conflictividad muestra el parteaguas que significó la destitución de Rousseff. Como se observa en el gráfico 4, en los inicios del nuevo gobierno petista entre 2012 y 2014, el ciclo de protestas estuvo concentrado en los núcleos distributivos y de derechos sociales, relacionados con demandas económicas y sociales. Cabe agregar que los efectos de la crisis global de 2008/2009, en Argentina y Brasil, tuvieron un tiempo tardío respecto de los países centrales, por lo que se vieron con mayor crudeza luego de 2011. Así, el freno al crecimiento económico y la política de austeridad del tercer gobierno del PT para hacer frente a la crisis externa impactaron directamente en el incremento de este tipo de demandas. Asimismo, la realización de los megaeventos no tuvo un peso estadístico central (representaron el 2,1% de las demandas), pero sí fueron utilizados por sectores antipetistas para construir un discurso contra la corrupción y la malversación de fondos. El detonante del ciclo corto de movilización de 2013 fue el aumento en la tarifa del transporte público, que convergió con demandas contra los mega eventos, por tierra y por vivienda. En 2015, luego de la ajustada victoria electoral de Rousseff, se inició el proceso de *impeachment* por lo que el problema público de la corrupción y el mal desempeño de los funcionarios fue cobrando una relevancia significativa.

Como se observa en el gráfico 4, el cambio en la dinámica de los núcleos de conflictividad es significativo. Las protestas referidas a derechos sociales pasaron de estar presentes del 54% de las protestas al 30%, mientras que la política institucional pasó de estar presente en menos del diez por ciento al 45%. Haciendo una breve recapitulación, desde la victoria ajustada del PT se inició el proceso de reconfiguración de los núcleos de conflictividad.

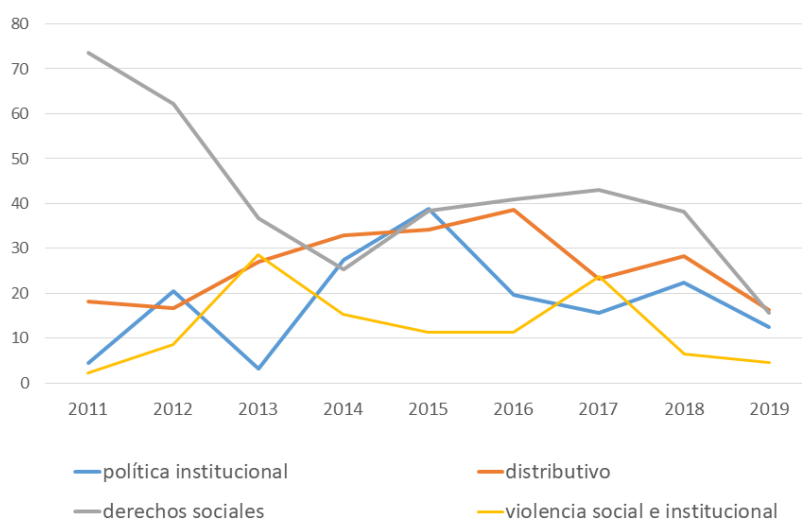
Primero, la oposición cuestionó el resultado electoral, impulsando denuncias de corrupción y de fraude; asimismo, iniciaron vía redes sociales una campaña de activación de protestas callejeras con un sentido destituyente, para potenciar el pedido de *impeachment*. Estas acciones configuraron un escenario de fuerte polarización política, que se expresó en las calles, primero en la disputa por el *impeachment* y luego por la discusión por la legitimidad del gobierno de Temer. En el primer momento, los protagonistas estaban asociados a sectores antipetistas y nacionalistas de derecha, y luego se (re)incorporaron sectores petistas para defender el gobierno y la institucionalidad en general. De esta manera, a diferencia de Argentina en Brasil sí hubo coincidencias entre la polarización del campo político y de la movilización. Así, la discusión que se abrió luego de 2016 se concentró en el funcionamiento institucional y en la democracia, con amenazas de intervención militar.

Como mencionamos, 2017 fue un año crítico en términos económicos y sociales por las reformas regresivas impulsadas por Temer. Este fue el único año luego del *impeachment* que la discusión sobre el funcionamiento de la democracia compartió agenda con otros núcleos, debido a la aprobación de la reforma laboral impulsada por el presidente interino, que habilitaba mayores niveles de flexibilización laboral (en la forma de contratación, en la jornada laboral, etc.) y la negociación directa entre empresas y trabajadores.

Al mismo tiempo, entre 2017 y 2018, el gobierno federal profundizó la represión callejera y en los territorios y una política de persecución a dirigentes opositores como el encarcelamiento del ex presidente Lula Da Silva o el asesinato de la concejala por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL)- de Río de Janeiro, Marielle Franco el 18 de marzo de 2018. Otro acontecimiento se relacionó con cuestiones vinculadas al racismo y la violencia institucional, en julio de aquel año se organizó la *Marcha das Mulheres Negras* (Marcha de las Mujeres Negras), cuya consigna principal era “*Mulheres Negras resistem: em movimento por direitos, contra o racismo, o sexismo e outras formas de violência*”. La profundización de la violencia dio lugar a una visita oficial de la CIDH en noviembre de 2018, para conocer la situación de los derechos humanos en Brasil. En su informe, la CIDH (2018), identificó la vigencia de reglamentaciones y medidas que se orientaban a reducir políticas protectorias de los derechos humanos, sobre todo con un claro sesgo de clase y raza. El último acontecimiento clave del año en esta dirección tuvo lugar el 29 de septiembre a propósito del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Allí surgió el *#EleNão* primero como hashtag y luego como colectivo para rechazar la candidatura presidencial de Jair Bolsonaro debido a sus declaraciones sexistas, misóginas y su inscripción internacional en la extrema derecha. Así, durante la campaña electoral se realizaron masivas movilizaciones, promovidas entre otras por *Mulheres Unidas contra Bolsonaro* (Campos Paulino y Campos Paulino, 2019). Todos estos acontecimientos fueron claves para el pico elevado del núcleo de violencia social e institucional de 2018.

Estos acontecimientos y procesos fueron claves para la tematización de la democracia como problema. Dicho brevemente, la discusión subyacente en la movilización cuestionaba originalmente el funcionamiento del sistema político -específicamente la corrupción- y luego se generalizó hacia el régimen político poniendo en cuestión la democracia como institución clave de la comunidad política. Esta era la discusión cuando el 1° de enero de 2019 Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil.

Gráfico 5: Evolución de los núcleos de conflictividad en Chile. En porcentajes sobre el total de protestas de cada año.



Nota: el porcentaje se expresa sobre el total de protestas de cada año. En 2011 fueron 226 protestas, en 2012: 185, en 2013: 210, en 2014: 91, en 2015: 167, en 2016: 230, en 2017: 172, en 2018: 152 y en 2019: 321. Al ser la demanda una variable múltiple, los porcentajes pueden superar el 100%. La categoría “otros” constituye una de tipo residual, por lo que no será tomada en cuenta para el análisis.

Fuente: elaboración propia en base a Carvalho, et al. (2024).

En el caso de Chile, la trayectoria de los debates públicos expresados en los núcleos de conflictividad presenta, tal como se señaló con anterioridad, un predominio de las protestas asociadas a derechos sociales, en el que se destacan las demandas estudiantiles y el protagonismo del movimiento estudiantil como activador de los ciclos de movilización. Si observamos la trayectoria de cada núcleo encontramos algunos elementos interesantes para comprender la significación y magnitud del estallido de 2019.

Por un lado, es llamativa la tendencia del núcleo de derechos sociales, con una caída importante pasando de más del 70% a menos del 40% en 2013. Este comportamiento coincidió con el primer gobierno de Piñera, dado que su posicionamiento en la derecha habilitaba un campo de protesta mayor para la discusión de los derechos sociales, principalmente la educación y las pensiones. Respecto de este núcleo es importante señalar el “Mayo feminista” de 2018, recordado como el ciclo de movilización feminista con mayor participación en la historia nacional (Sola-Morales y Quiroz, 2021). Este se desarrolló en un contexto marcado por la movilización transnacional de #NiUnaMenos y por el mediático #metoo, impulsado por estudiantes de colegios secundarios y universitarios instaló en la discusión pública la violencia de género en ámbitos educativos. Paralelamente, en 2013 se observa un acercamiento estadístico entre el núcleo distributivo y el de violencia social, sobre todo por el incremento de la represión en contextos de protesta.

Durante los primeros años de la segunda presidencia de Bachelet como mencionamos se produjeron algunas reformas progresistas pero parciales, reorientando los núcleos de conflictividad hacia la cuestión distributiva y de política institucional. El núcleo distributivo tuvo un crecimiento entre 2013 hasta 2016 por la discusión de la reforma laboral. Como ya mencionamos esta reforma tuvo carácter progresivo, aunque parcial. Estas características son claves para explicar por qué si bien en un inicio, las protestas se organizaron para apoyar y reclamar su aprobación, aunque después haya sido considerada insuficiente debido a que no tocaba aspectos estructurales.

La novedad de este momento fue el pico del núcleo de política institucional, con un peso relativamente bajo en el resto de la serie. Esta debe atribuirse a varias cuestiones. Por un lado, las demandas del movimiento estudiantil de los primeros años del período se desplazaron de temas educativos a reclamos contra el régimen político por la falta de respuesta de los gobiernos. Por otro lado, y en coincidencia con otros países de la región y de los aquí analizados, irrumpió la corrupción como un problema central de la agenda pública. Uno de los casos paradigmáticos de esta tematización fue el caso “Penta” ya mencionado. En este sentido, Garretón (2021) ha señalado que, si bien las demandas de las movilizaciones estudiantiles eran principalmente educativas, progresivamente fueron avanzando hacia la impugnación general del modelo heredado de la dictadura. Al respecto, es cierto que uno de los discursos que circulaba en ese entonces remitía a que no era posible hacer reformas de fondo debido a las limitaciones planteadas en la carta magna. De esta manera, se fue construyendo un sentido compartido en torno al rol subsidiario que podía tener el gobierno central mientras estuviera vigente la constitución pinochetista. A su vez, en 2015 se reactivó el conflicto educativo por la ausencia de respuestas del gobierno a los reclamos históricos del movimiento estudiantil, mostrando que se trata de un conflicto latente. En los años subsiguientes esta discusión volvió a tomar preponderancia en la agenda pública.

A partir del segundo gobierno de Piñera, el conflicto social se incrementó hasta el estallido social de octubre de 2019 en el que el descontento generalizado desdibujó los reclamos más precisos. Como en todo ciclo de movilización, las demandas se fueron generalizando. En este sentido, una de las consignas que apareció durante las protestas fue “Son tantas weás que no sé qué poner” (Mayol, 2019). La persistencia de demandas que no fueron canalizadas ni procesadas institucionalmente, combinada con una transversal e interpartidaria represión y la pérdida de legitimidad de las elites a partir de casos de corrupción, hicieron estallar el modelo. Moulian (2019) ha señalado que Chile ha combinado un modelo de economía libre, una democracia de baja intensidad con escasos espacios de deliberación y participación política ciudadana y una cultura política basada en el individualismo y lo adquisitivo más que en lo asociativo y lo expresivo, con una aguda concentración de la riqueza y excesivos privilegios de las clases altas, con una alta evasión impositiva. En tal sentido, el interpelativo “evade” como activador de la protesta de ese octubre cobra otro sentido, el de forzar cierta igualdad. Así, el estallido puso en jaque a todo el régimen político inaugurado en la transición. Chile es de los países latinoamericanos donde se ha configurado con mayor pregnancia un sistema de mercantilización de la vida cotidiana, entre ellos de la educación, la salud, la seguridad, la previsión social. La implosión del “modelo chileno” tuvo resonancias además para la región, en general era el ejemplo que los sectores dominantes recomendaban seguir en materia de políticas públicas.

Reflexiones finales

En este artículo nos propusimos analizar una época convulsionada, con estallidos sociales, golpes institucionales, violencia política, empobrecimiento y el ascenso de la extrema derecha. La entrada que elegimos fue el análisis de la dinámica de la movilización social, atendiendo especialmente a los núcleos de conflictividad que se construyeron a partir de los cuales los actores sociales instalaron demandas y formularon problemas públicos sobre los cuales intervenir. Desde esta propuesta analítica pudimos reconstruir la intensidad del conflicto, el despliegue de las principales controversias que explican el creciente descontento social en torno a las desigualdades producidas por el neoliberalismo, que erosionaron progresivamente la convivencia social y política, marcando como tendencia el debate en torno al régimen político y la democracia. La disputa en torno a esta no sólo se produjo en términos de su funcionamiento o del desempeño de los funcionarios, sino fundamentalmente en las condiciones y posibilidades de la comunidad política. La ventaja de este enfoque es que permite poner en perspectiva el proceso de los tres países que analizamos.

En Argentina, la principal controversia se desarrolló en torno al núcleo distributivo, subyacente al debate en relación con el modelo de acumulación, sin resolverse desde la crisis de 2001. Cuando no está resuelto nos referimos a que desde aquel momento no se ha logrado estabilizar una hegemonía respecto de la orientación económica general que lleva adelante el país. La discusión respecto a los derechos sociales está sumamente relacionada con el funcionamiento del Estado. Durante el kirchnerismo, se decía que el “Estado” había regresado en oposición al modelo neoliberal de los 90; sin embargo, esa retórica que intentaba reponer algo del orden de la voluntad política de garantizar derechos no siempre fue acompañada por la creación y ampliación de las capacidades estatales necesarias. Así se generaron discursos contradictorios y, a su vez, entre las palabras y acciones gubernamentales. El triunfo electoral de la derecha en 2015 profundizó esta aparente contradicción debido al claro posicionamiento anti-estatista del gobierno macrista. De nuevo, el Estado parecía tener la culpa de todos los problemas sociales. Así se generaron las nuevas condiciones de desprestigio estatal y de su intervención sobre el campo social. La sorprendente continuidad de estos debates a lo largo de dos gobiernos de signo antagónico permite explicar en parte la erosión que han sufrido las dos grandes coaliciones (peronista y de centro-derecha) en los últimos tiempos, de algún modo señalando su incapacidad para ofrecer nuevas respuestas a dilemas ya consolidados. Algo de esto -no tenemos espacio para explayarnos, ni tampoco fue objetivo de este artículo- explica la emergencia de la extrema derecha y su triunfo electoral en 2023.

En Brasil, la trayectoria de la protesta social mostró una transformación radical de sus núcleos de conflictividad, tomando como diferenciador *el impeachment* a Rousseff en agosto de 2016. Hasta ese momento, la conflictividad se había incrementado significativamente en cuanto a derechos sociales, y en un segundo lugar sobre el núcleo distributivo, reclamos que pugnaban por seguir avanzando en la conquista de derechos y limitar las políticas de austeridad que el gobierno implementó para sortear la crisis internacional. En este clima de protestas, junto a una victoria electoral por escaso margen y la aparición de casos de corrupción, las demandas se orientaron contra el gobierno y el sistema político. Además, hay que señalar la vocación golpista de la derecha brasileña, dispuesta a vulnerar las instituciones democráticas para

implementar un programa político-económico que no lograba colar por las urnas. Desde la campaña electoral de 2014 hasta el *impeachment* el clima social cambió rotundamente. El golpe institucional, la polarización y violencia política, la persecución (y hasta asesinato) de dirigentes opositores, pusieron en el centro del debate social a la política institucional, el funcionamiento del sistema político y la legitimidad de la democracia. Como mencionamos, para el Brasil de ese momento, como para el actual en Argentina, la emergencia de la extrema derecha implica un amplio cuestionamiento a la democracia en términos no sólo de su funcionamiento sino de la comunidad política y, con ella, la impugnación a la igualdad. No es casual que los discursos de los líderes como Bolsonaro se orientan a reponer las jerarquías sociales y de género. No sólo se trata de implementar nuevamente un programa neoliberal o neoconservador en materia económica, sino fundamentalmente de socavar los imaginarios en torno a los derechos, como si todo fuera mercantilizable, reductible a una lógica de intercambio económico.

En Chile, hay una dinámica diferente a Argentina y Brasil, con algunos puntos de contacto. El principal debate se orientó a los derechos sociales, encabezado por el conflicto educativo, que expresaba el descontento por la vigencia de la constitución pinochetista, de matriz neoliberal que ha delineado una sociedad individualizante, con poca capacidad para crear imaginarios en torno a bienes colectivos. Por esto, tanto en la lucha educativa como en la que pugnaba por una reforma laboral progresista, se representaba un hartazgo que desencadenó el estallido de octubre de 2019 y su fuerte cuestionamiento a los 30 años de hegemonía neoliberal como creador de una sociedad fundamentalmente excluyente. La demanda era por desmercantilizar la vida, por reabrir un espacio en la comunidad política donde primaran valores vinculadas a la igualdad contra la estratificación que proponen las jerarquías sociales.

Los tres casos muestran de qué manera históricas controversias y nuevas disputas se activaron a partir de problemáticas particulares y han derivado en caminos diversos, según el sistema político vigente, la capacidad de respuesta del Estado, la represión y el signo político ideológico del gobierno. Cinco años después del período estudiado, en la Argentina, sin estallido social ni crisis de gran escala, la sociedad decidió votar a un candidato anarcoliberal, *outsider* del sistema político, de extrema derecha luego del fracaso de las dos principales fuerzas políticas. En Chile, en 2020 asumió la presidencia una fuerza de izquierda, emergente de la lucha estudiantil, al mismo tiempo que surgió luego del estallido un candidato de ultraderecha con posibilidad de acceder al gobierno en la próxima elección. El fracaso sucesivo del proceso constitucional fue clave para que Boric decidiera su clausura por el momento. Es difícil saber cuál será el efecto en el mediano plazo de ese proceso trunco. En Brasil, luego de ser liberado debido a lo fraudulento del proceso en su contra, Da Silva volvió a ganar la presidencia con una alianza con sectores liberales, por poco margen. Ahora bien, esto no ha implicado la desarticulación de los sectores de extrema derecha y bolsonarista que el 8 de enero de 2023 tomaron por asalto la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.

Como puede observarse, en los tres países hay crisis latentes, la desigualdad y el descontento con la democracia persisten, conviven -no sin excesivos conflictos- expresiones de extrema derecha, que reivindican pasados dictatoriales, aliados a las derechas más tradicionales junto con sectores progresistas, que muestran signos de moderación y que no logran dar

respuestas estructurales a los reclamos sociales. El proceso está abierto, tal vez la movilización social nos dé pautas sobre su devenir.

Bibliografía

Abers, Rebecca, Almeida, Débora y Bülow, Marisa (2023): *A disputa pela democracia: Ativismos em contextos turbulentos*, Editora Zouk, Porto Alegre.

Assusa, Gonzalo y Kessler, Gabriel (2020): “¿Desigualdades injustas? Transformaciones y continuidades del contexto pos-progresista en América Latina”, en revista *Ecuador. Debates, balances y desafíos post-progresistas*, CLACSO, Buenos Aires, pp. 443-471.

Avendaño, Octavio (2019): “Estallido social en Chile: Los dilemas políticos desde octubre del 2019”, *Revista de Ciencia Política*, N° 57 Vol. 2, pp. 105-119. <https://doi.org/10.5354/0719-5338.2019.61558>.

Avritzer, Leonardo (2019): “The Double Crisis of Representation and Participation in Brazil”, *Representation, Journal of Representative Democracy*, N° 55, Vol. 3, pp. 251-263. <https://doi.org/10.1080/00344893.2019.1572646>.

Bringel, Breno, Martínez, Alexandra, Muggenthaler, Ferdinand. (2021): *Desbordes: Estallidos sujetos y porvenires en América Latina*, Fundación Rosa Luxemburg, Quito.

Campos Paulino, Simone y Campos Paulino, Silvia (2019): “#ELENÃO: reflexões sobre ciberativismo feminista no Brasil nas eleições presidenciais de 2018”, *Revista Magistro*, N°19, Vol. 1.

Cantamutto, Francisco, López, Emiliano (2019): “¿El programa imposible? El dilema entre el ajuste y la legitimidad al interior del bloque en el poder”, en Pablo Belloni y Francisco Cantamutto (comp.), *La economía política de Cambiemos*, Batalla de Ideas, Buenos Aires, pp. 21-60.

Carvalho, Laura (2018): *Valsa brasileira: do boom ao caos econômico*. Todavía, São Paulo.

Carvalho, Priscila, Natalucci, Ana y Somma, Nicolás (2025): *Protestas, democracia y desigualdades en el Cono Sur*. Prometeo, Buenos Aires.

Carvalho, Priscila, Mate, Ernesto, Díaz, Ignacio (2025): “La protesta como crítica y creación: las disputas sobre los procesos económicos y políticos”, en Priscila Carvalho, Ana Natalucci y Nicolás Somma (ed.) *Protestas, democracia y desigualdades en el Cono Sur*, Prometeo Ediciones, Buenos Aires.

Carvalho, Priscila, Natalucci, Ana, Somma, Nicolás, Tatagiba, Luciana (2024): “LAProtesta. Análisis de la contienda política en el Cono Sur de América”. Base de Datos de Eventos de Protesta, Argentina, Brasil y Chile (2011-2020).

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Organización de Estados Americanos (OEA) (2018): Observaciones Preliminares de la Visita in loco de la CIDH a Brasil. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/238OPesp.pdf>.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Organización de Estados Americanos (OEA) (2022): “Situación de Derechos Humanos en Chile”. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2022_chile.pdf.

Della Porta, Donatella y Diani, Mario (2015): *Los movimientos sociales*. CIS y Editorial Complutense, Madrid.

De la Torre, Carlos (2013): “In the Name of the People: Democratization, Popular Organizations, and Populism in Venezuela, Bolivia, and Ecuador” *European Review of Latin America and Caribbean Studies*, N° 95, pp. 27-48. <https://doi.org/10.18352/erlacs.9229>.

Deutsche Welle (2015): *Gran marcha por la educación y contra la corrupción en Chile*. DW. Disponible en <https://www.dw.com/es/decenas-de-miles-marchan-por-la-educaci%C3%B3n-y-contra-la-corrupci%C3%B3n-en-chile/a-18388683>

Dias, Tayrine, Bülow, Marisa, Gobbi, Danniell (2021): “Populist Framing Mechanisms and The Rise of Right-Wing Activism in Brazil”, *Latin American Politics and Society*, 63(3), pp. 69-92.

Donoso, Sofía (2014): “Outsider” and “Insider” Strategies: Chile’s Student Movement, 1990–2014. En Sofía Donoso, y Marisa Von Bülow (Ed.) *Social Movements in Chile Organization, Trajectories, and Political Consequences*. Palgrave Macmillan.

Etchemendy, Sebastián (2019): “The Politics of Popular Coalitions: Unions and Territorial Social Movements in Post-Neoliberal Latin America (2000-15)”, *Journal of Latin American Studies*, N° 52, Vol. 1, pp. 157-188. <https://doi.org/10.1017/S0022216X19001007>.

Ferrero, Juan Pablo, Natalucci, Ana, y Tatagiba, Luciana (Orgs.). (2019). *Socio-political dynamics within the crisis of the left: Argentina and Brazil*, Rowman & Littlefield International, Londres.

Fillieule, Oliver. y Tartakowsky, Danielle (2015): *La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles*, Siglo XXI, Buenos Aires.

Gaggero, Alejandro, Schorr, Martín y Wainer, Andrés (2014): *Restricción Eterna: el poder económico durante el kirchnerismo*. Futuro Anterior Ediciones, Buenos Aires.

Gold, Tomás (2019): “Tracing the Left Turn Crisis through Argentine Protest: The Anti-Kirchnerist Cycle of Mobilization (2012-2013)”, en Juan Pablo Ferrero, Ana Natalucci y Luciana Tatagiba (eds.), *Socio-Political Dynamics within the Crisis of the Left: Argentina and Brazil*, Rowman & Littlefield International, Londres, pp. 117-140.

Gradín, Agustina, Soto Pimentel, Verónica y Reiri, Matías (2022): “Demandas, protestas y pandemia en la Argentina. Un análisis de la conflictividad social durante los dos primeros años de gestión del gobierno de Alberto Fernández (2020-2022)”, *Revista Estado y Políticas Públicas*, N° 18, 2022, pp. 209-232.

Guerrero Bernal, Juan Carlos, Márquez Murrieta, Alicia, Pereyra, Sebastián y Nardacchione, Gabriel (2018): *Problemas públicos. Controversias y aportes contemporáneos*, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ciudad de México.

Hutter, Swen (2014): “Protest Event Analysis and Its Offspring”, en Donatella della Porta (ed.), *Methodological Practices in Social Movement Research*, Oxford University Press, Oxford, pp. 335-367.

Kerche, Fabio y Marona, Marjorie (2022): *A política no banco dos réus: A Operação Lava Jato e a erosão da democracia no Brasil*, Autêntica, Belo Horizonte.

Kulfas, Matías (2016): *Tres Kirchnerismos. una Historia de la Economía Argentina 2003-2015*. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

Levitsky, Steven, y Ziblatt, Daniel (2018): *How democracies die*. Crown Publishing, Nueva York University, Baltimore.

Levitsky, Steven y Roberts, Kenneth (2011): *The Resurgence of the Latin American Left*. Johns Hopkins

Mayol, Alberto (2019): *Big bang. Estallido social 2019. Modelo derrumbado - sociedad rota - política inútil*. Catalonia, Santiago de Chile.

Mejías, Silvina y Panes, Danilo (2018): Reestructuración neoliberal y crisis del sistema previsional. En Ignacio Rodríguez, Pablo Vommaro (coord.). *Desigualdades, exclusión y crisis de sustentabilidad en los sistemas previsionales de América Latina y el Caribe*, CLACSO, pp. 47-86.

Melucci, Alberto (2001): ¿Qué hay de nuevo en los nuevos movimientos sociales? En E. Laraña y J. Gusfield, *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*. CIS, Madrid, pp. 119-149.

Melucci, Alberto (1994): “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales”, *Zona Abierta*, N° 69, pp. 153-180.

Moulian, Tomás (2019): *Chile actual. Anatomía de un mito*. LOM Ediciones, Santiago.

Natalucci, Ana, Fernández Mouján, Lucio y Kelmesz, Alon (2025): “Demandas centrales de una época convulsionada. Desigualdades, neoliberalismo y democracia en Argentina, Brasil y Chile”, en Priscila Carvalho, Ana Natalucci y Nicolás Somma (eds.) *Protestas, democracia y desigualdades en el Cono Sur*, Prometeo Ediciones, Buenos Aires.

Natalucci, Ana, Fernández Mouján, Lucio y Mate, Ernesto (coord). (2023): *La protesta en la era Cambiemos: conflicto por la distribución y respuesta represiva*. Método Citra N° 13, CITRA.

Natalucci, Ana y Ferrero, Juan Pablo (2021): “Repensando la nueva dinámica sociopolítica en Argentina y Brasil, 2011-2016”, en *Revista Estudios Políticos*, N° 60. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n60a14>.

Natalucci, Ana (2022): “The Unexpected Effect of the 2001 Crisis: The Revival of Right-Wing Mobilisation in Argentina”, *Bulletin of Latin American Research (SLAS)*, N° 39, pp. 67-70. <https://doi.org/10.1111/blar.13338>.

Natalucci, Ana y Fernández Mouján, Lucio (2021): “¿Un giro a la derecha? Movilización y política en la Argentina contemporánea (2015-2019)”, en *Polis, Revista Latinoamericana*, N° 61, pp. 79-103. <https://doi.org/10.32735/S0718-6568/2022-N61-1706>.

Natalucci, Ana y otros (2020): “La protesta en cuarentena. Análisis de una base cuantitativa sobre protestas sociales en el marco del proyecto Monitor Laboral”, *Método Citra*, Vol. 6. Disponible en línea en: https://citra.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/2020_DOCUMENTO_Metodo-CITRA-volumen-6.pdf.

Natalucci, Ana (2019): “Social Mobilisation and Politics in Argentina: Peak and Crisis of the Left Turn”. En: J.P. Ferrero, A. Natalucci y L. Tatagiba (eds.). *Socio-Political Dynamics within the Crisis of the Left: Argentina and Brazil*. Rowman & Littlefield International, Londres, pp. 65-94.

Natalucci, Ana (2015): “Corporativismo y política: dilemas del movimiento obrero durante el kirchnerismo”, en *Población & Sociedad*, N° 2, Vol. 22, pp. 5-25. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-85622015000200001&lng=es&nrm=iso. ISSN 1852-8562.

Offerlé, Michel (2005): “Bajar a la calle de la "jornada" a la "manif"”, *Política*, N° 44, pp. 33-59. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64504402>.

Peira, Pedro (1977): “Estudio lexicológico de un campo nocional: «Libertad», «igualdad» y «felicidad» en la España de la Regencia de María Cristina”, *Boletín de la Real Academia Española*, Tomo 57, Cuaderno 211, pp. 259-294.

Pereyra, Sebastián y Nardacchione, Gabriel (2022): “Más acá de la interpretación: Aportes del pragmatismo a las ciencias sociales”, en Germán J. Pérez y Martín Armelino (eds.), *Luz de giro: nuevas reflexiones sobre filosofía y métodos de las ciencias sociales*, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, pp. 61-99.

Pereyra, Sebastián. (2013): *Política y transparencia. La corrupción como problema público*. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

Przeworski, Adam (2022): *Las crisis de las democracias*. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

Rebón, Julián y Troncoso, Fabio (2022): “La estructura social en la protesta durante la crisis del COVID-19”, en Pablo Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia*, Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, pp. 185-199.

Rennes, Juliette (2020): “Las controversias políticas y sus fronteras”, *Estudios Sociales*, N° 58, pp. 257-283.

Rossi, Federico y Silva, Eduardo (2018): *Reshaping the Political Arena in Latin America. From Resisting Neoliberalism to the Second Incorporation*. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.

Ruiz, Carlos y Boccardo, Giorgio (2014): *Los chilenos bajo el neoliberalismo: clases y conflicto social*. Fundación Nodo Veintiuno, Santiago.

Ruiz Encina, Carlos (2013): *Conflicto Social en el Neoliberalismo Avanzado*, CLACSO, Buenos Aires.

Schuster, Federico y otros (2006): *Documento de Trabajo N° 48 Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003*. Instituto Gino Germani (IIGG), Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de Buenos Aires. (FCS-UBA).

Selamé, Nicolás (2022): “Masivo y antielitario: el estallido social chileno como momento populista”, *Revista Stultifera*, N° 2, Vol. 5, pp. 241-264. <https://doi.org/10.4206/rev.stultifera.2022.v5n2-10>.

Silva, Eduardo (2017): “Reorganizing popular sector incorporation: Propositions from Bolivia, Ecuador, and Venezuela”, *Politics and Society*, N° 45, Vol. 1, pp. 91-122. <https://doi.org/10.1177/0032329216683166>.

Singer, André (2012): *Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador*. Companhia das Letras, São Paulo.

Sola-Morales, Salomé, y Quiroz, Carla (2021): “El Mayo feminista chileno de 2018, en la cresta de la cuarta ola. Uso y apropiación de las redes sociales”. *Revista Punto Género*, N° 15, pp. 201–232. <https://doi.org/10.5354/2735-7473.2021.64413>.

Somma, Nicolás, Garretón, Matías, Campos, Tomás y Joignant, Alfredo (2020): “Radiografía del “estallido social”, en: Alfredo Joignant, Nicolás Somma, Matías Garretón, y Tomás Campos. *Informe anual Observatorio de Conflictos 2020*, COES, pp.11-21.

Stefanoni, Pablo (2020): *¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la incorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio)*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

Svampa, Maristella (2017): “Cuatro claves para leer América Latina”, *Nueva Sociedad*, N° 268. Disponible en: <https://nuso.org/articulo/cuatro-claves-para-leer-america-latina/>.

Tarrow, Sydney (1997): *El poder en Movimiento*. Alianza, Madrid.

Tatagiba, Luciana (2019): “Crossroads of Brazilian Democracy: Dynamics of Social Mobilization During the Left Turn Cycle”, en Juan Pablo Ferrero, Ana Natalucci y Luciana Tatagiba (eds.), *Socio-Political Dynamics within the Crisis of the Left: Argentina and Brazil*. Rowman & Littlefield International, Londres, pp. 37-64

Tatagiba, Luciana y Galvão, Andrea (2019): “Os protestos no Brasil em tempos de crise (2011-2016)”, *Opinião Pública*, N° 25, Vol. 1. Disponible en línea en <https://www.scielo.br/j/op/a/C5zs3mVLLL3YXVyVpw4jhgG/>

Tatagiba, L. (2018): “Entre as ruas e as instituições: os protestos e o impeachment de Dilma Rousseff”, *Lusotopie*, N° 17, pp. 112-135.

Tilly, Charles (1998): Conflicto político y cambio social, en P. Ibarra, y B. Tejerina (Comp.), *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*, Trotta, Madrid, pp. 25-41.

Touraine, Alan (1987): *El regreso del actor*, Eudeba, Buenos Aires.

Varesi, Gastón (2018): “Relaciones de fuerza bajo la presidencia de Macri”, en *Realidad Económica*, N° 47, Vol. 320. Disponible en línea en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.12525/pr.12525.pdf.

Vommaro, Gabriel (2017): *La larga marcha de Cambiemos: la construcción silenciosa de un proyecto de poder*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

Vommaro, Gabriel, Morresi, Sergio y Bellotti, Alejandro (2015): *Mundo PRO: Anatomía de un partido fabricado para ganar*, Editorial Planeta, Buenos Aires.

Zanotti, Lisa y Roberts, Kenneth (2021): “(Aún) la excepción y no la regla: La derecha populista radical en América Latina”, *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, N° 30, Vol. 1, 23–48. <https://doi.org/10.26851/rucp.30.1.2>.